

## SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARGOS DISCRECIONALES

### Datos de la persona solicitante

Nombre y apellidos	MANUEL JOSE BAEZA DIAZ-PORTALES

### Datos del concurso

Concurso	Magistrado/a Sala Tercera del Tribunal Supremo, vacante Octavio Herrero BOE 04/11/2024 EPIGRAFE 22732
Fecha de solicitud	22 noviembre 2024

### Plaza solicitada

DESCRIPCIÓN	ORD.PREF.	ID PLAZA
Magistrado/a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, plaza reservada a magistrado/a especialista	1	296

### Experiencia

Otros Idiomas	Inglés: First Certificate English (B2 certificado por Cambridge)
---------------	--

### Historial Destinos

Experiencias Gubernativas			
ORGANO	CARGO	F.INICIO	F.FIN
Sala de Gobierno del TSJ País Vasco (1)	miembro turno electos	03-nov-1999	04-dic-2001
Sala de Gobierno del TSJ Comunidad Valenciana (2)	miembro turno natos	04-nov-2016	22-nov-2024
(1) Las fechas son aproximadas, no las recuerdo exactamente			
(2) Durante todo este tiempo he estado en la Comisión Permanente de dicha Sala de Gobierno			
Actividades no Judiciales			
ACTIVIDAD	RELEVANCIA	F.INICIO	F.CESE
Profesor de Master	Master en Derecho Financiero y Tributario/Asesoría Fiscal, impartido por el IEF Valencia	03-oct-2005	19-jun-2014
Autor libro	"Responsabilidad tributaria: administradores sociales y otras cuestiones problemáticas"	04-nov-2011	04-nov-2011
Coautor Libro	"Principios Generales del	15-oct-2008	15-oct-2008

	Derecho Administrativo Sancionador"		
Coautor libro	"Comentarios a la Ley de Haciendas Locales"	13-jun-2016	13-jun-2016
Coautor Libro	"Comentarios a la Ley General Tributaria al hilo de su reforma"	08-jun-2016	08-jun-2016
Coautor libro	"Comentarios a la Ley de Haciendas Locales"	14-dic-2005	14-dic-2005
miembro ponencia LEC 2000 País Vasco	modelos exportados a buena parte del resto del territorio nacional	07-sep-2000	21-dic-2000
Autor artículo	"Aspectos económicos del proceso contencioso-administrativo" Cuadernos Dº Judicial	18-may-2004	18-may-2004
Autor artículos	Diversas publicaciones en materia contencioso-administrativa	06-nov-2000	15-nov-2023
Conferenciante y ponente	Foros de especialización jurídico tributaria	11-ene-1993	21-nov-2024
Colaboraciones			
TIPO COLABORACION	ÓRGANO	FECHA	
Director y ponente CONGRESO TRIBUTARIO 2009 a 2024	CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL- ASOCIACIÓN ASESORES FISCALES-se aporta certificación	08-oct-2009	
ponente "Curso sobre la nulidad de actuaciones en LOPJ"	CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	05-nov-1999	
Ponente "Aspectos económicos LJCA"	CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	08-mar-2004	
Ponente ENCUNTROS PRESIDENTES SCATSJ 2017 a 2024	CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	22-may-2017	
Director y ponente "Congreso Internacional Tributación"	CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	10-nov-2014	
Director y ponente Conciliación intrajudicial en la LJ	CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	21-sep-2017	
Director "Mediación contencioso-administrativa"	CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	04-abr-2019	
Ponente "Nueva Ley de Contratos del Sector Público"	CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	17-jun-2019	

Resoluciones	
Orden	contencioso
Órgano	Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativode València
Fecha resolución	22 julio 2020
Número procedimiento	422/2020
Materia	precinto cajas de seguridad bancarias por la Administración tributaria
Datos procedimiento	Sentencia recurrida en casación e inadmitida por TS. Posteriormente, el TS confirmó la solución conferida por la sentencia de referencia a todas las cuestiones jurídicas tratadas en la misma al resolver otra casación contra otra sentencia de la misma Sala e idéntica a la primera. (ECLI:ES:TS:2024:1876)
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	Es la primera sentencia dictada en el panorama nacional que estudia la afectación a DDFF de estos precintos de la AEAT y si resulta -o no- necesaria autorización judicial para tal precinto. Incluye cuestiones complejas y altamente relevantes, como (i) el domicilio constitucionalmente protegido de

	las personas físicas y las cajas de seguridad bancarias, (ii) el alcance conceptual en estos casos del derecho a la intimidad personal, (iii) la proyección a estos supuestos de la doctrina del TS y TC respecto de la necesidad -o no- de autorización judicial para la injerencia en el derecho a la intimidad sin necesidad de autorización judicial, (iv) la concurrencia -o no- en estos supuestos de los requisitos de de habilitación legal y proporcionalidad; o (v) el domicilio constitucionalmente protegido de las personas jurídicas y de las personas físicas con actividad empresarial o profesional y en estos casos. Sentencia pleno S3ª.
Análisis	(i) una caja de seguridad no es domicilio constitucionalmente protegido, pero está protegida por el derecho a la intimidad personal ya que "representa un ámbito propio reservado frente los demás" y "no hay plena intimidad si no se puede disponer de aquello que es íntimo"; (ii) No toda interferencia del derecho a la intimidad precisa autorización judicial si existe previsión legal y concurre estricta observancia del principio de proporcionalidad.
Orden	contencioso
Órgano	Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativode València
Fecha resolución	27 octubre 2020
Número procedimiento	296/2020
Materia	Solicitud de autorización judicial de medidas limitativas de derechos fundamentales
Datos procedimiento	Esta sentencia fue recurrida en casación e inadmitida por el TS. Posteriormente, el TS confirmó en varias sentencias (ECLI:ES:TS:2024:1876) la solución conferida por la sentencia de referencia a todas las principales cuestiones jurídicas tratadas en la misma al resolver otros recursos de casación.
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	Es la primera resolución que, en la época de la pandemia, viene referida a una solicitud de autorización judicial de medidas limitativas de derechos fundamentales, entre los que destaca el denominado "toque de queda" y la limitación de agrupaciones o reuniones de carácter familiar y/o social La complejidad deriva, además, del número y calibre de cuestiones a abordar y resolver, tales como (i) la competencia de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública para la adopción de las medidas sometidas a control judicial, (ii) si existe -o no- cobertura normativa sustantiva para la adopción de medidas sanitarias limitativas de libertades y derechos fundamentales, o (iii) el juicio constitucional de proporcionalidad de este tipo de medidas. La problemática abordada es completa y absolutamente novedosa, pues nunca se había planteado con anterioridad a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus SARS-CoV2.
Análisis	(i) la competencia de la Consellera deriva de la relación de la normativa estatal con la autonómica que se examina; (ii) la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, proporciona cobertura normativa sustantiva para la adopción de este tipo de medidas; (iii) se realiza el juicio constitucional de proporcionalidad en su triple vertiente de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
Orden	contencioso
Órgano	Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativode València
Fecha resolución	20 julio 2017
Número procedimiento	193/2017
Materia	Recurso de casación autonómica
Datos procedimiento	Este auto no fue recurrido ni se presentó incidente de nulidad alguno. Sin embargo, contra otros autos posteriores al mismo y que tenían el mismo contenido jurídico, sí que fueron presentados incidentes excepcionales de nulidad de actuaciones y, frente a la desestimación de estos incidentes, se interpusieron recursos de amparo ante el TC, que no prosperaron, manteniéndose -por tanto- la solución conferida a las cuestiones jurídicas de aquél.
Motivo relevancia	Es el primer auto que -sobre admisión o no- se dicta a propósito de la nueva

	casación autonómica (cuya regulación en la reforma es muy parca -a diferencia de la casación estatal-). Ello obliga prácticamente a tener que conformar por vía interpretativa e integrativa el procedimiento de la casación autonómica y resolver otras cuestiones sustantivas, tales como: (i) la procedencia de casación autonómica frente a sentencias de las Salas C-A; (ii) integración de la ausencia de regulación procedimental del recurso de casación autonómica; (iii) la proyección en el ámbito de la casación autonómica del requisito de admisibilidad a trámite relativo a que el recurso presente "interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; (iii) la procedencia -o no- de casación autonómica contra las sentencias de los Juzgados.
Análisis	Tras el análisis y razonamiento justificativo de tal incógnitas, se aplican los ss criterios: (i) la ausencia de regulación se integra acudiendo a la regulación de la casación estatal con las necesarias adaptaciones a la naturaleza de la casación autonómica y la configuración orgánica y funcional de las SSCATSJ; y (ii) el interés casacional objetivo solo es apreciable en caso de sentencias contradictorias entre la recurrida y otra de la misma Sala
Orden	contencioso
Órgano	Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo de València
Fecha resolución	28 noviembre 2013
Número procedimiento	2044/2010
Materia	Valor y carga de la prueba en la deducibilidad de facturas (liquidación y sanción)
Datos procedimiento	El criterio jurídico de la S. 1697/2013 fue asumido por el legislador con motivo de la reforma operada por la Ley 34/2015 LGT (art. 106.4, párr.), conteniendo la S 1165/2022 la continua línea evolutiva de la Sala de Valencia en esta materia respecto de nuevas cuestiones planteadas y reflexiones realizadas.
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	A diferencia del panorama judicial general (casuístico y sin el establecimiento de pautas al respecto), se generan criterios fundados en el principio "id plerumque accidit" para la deuda tributaria, aplicando -en cambio- a la sanción los principios del ius puniendi del Estado. De este modo, cabe que -por el juego de la carga de la prueba- se desestime el recurso para la deuda tributaria, y -en cambio- se estime para la sanción, ello dado que las reglas sobre carga de la prueba son distintas en el ámbito sancionador y aquí la Administración debe acreditar todos los elementos objetivos y subjetivos del injusto tributario. El inicial criterio asumido por el legislador permite una evolución sobre la base de la reflexión de que la deducibilidad de gastos no supone el reconocimiento de un beneficio fiscal y permite aflorar nuevos criterios de razonabilidad a la hora de valorar la prueba del obligado tributario (ej. S. 1165/2022).
Análisis	(i) no cabe descartar deducciones con una mera negativa o criterio inconsistente de la AEAT sino que esta tiene que aportar indicios serios y suficientes de la duda o negación, y solo entonces será exigible al interesado justificaciones adicionales; (ii) la carga de la prueba exigible al OT debe ponderarse conforme a pautas de proporcionalidad, evitando formalismos enervantes y una probatio diabolica; y (iii) valoración conjunta de parámetros
Orden	contencioso
Órgano	Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo de València
Fecha resolución	10 junio 2013
Número procedimiento	1353/2010
Materia	Impugnación de notificación individual de valores catastrales y ponencias de valores
Datos procedimiento	Esta sentencia no fue recurrida en casación. El criterio jurídico central y esencial pergeñado por esta sentencia fue asumido posteriormente por otras Salas de TSJs y -finalmente- también por el TS, como las de 5.10.2015 y 7 y 20.10.2015 (recursos de casación 3469/ 2013, 1887/2013 y 1352/2015). Desde entonces, es el criterio que pacíficamente se aplica.
Referencia Sentencia	████████████████████

Motivo relevancia	Antes de esta S., este tema había tenido ciertos "vaivenes" jurisprudenciales que, a su vez, habían dado lugar a SS de la Sala de Valencia y de otras Salas no homogéneas. Se trata la naturaleza de las Ponencias de Valores, una especie de "tertium genus" entre los meros actos administrativos y las disposiciones de carácter general, analizándose su carácter colectivo y dirigido a una pluralidad no completamente determinada de personas; su complejidad técnica y especializada, en la que se compendian instituciones de diversa índole (valorativa, catastral, urbanística y tributaria); el hecho de no ser objeto de notificación individualizada y su publicidad limitada. Se analizan las últimas sentencias del TS en ese momento (que negaban la posibilidad de impugnación indirecta de las ponencias de valores al considerarlas actos administrativos) y se examina la posibilidad de alegar vicios de la Ponencia de Valores al recurrir los VC.
Análisis	En base a los razonamientos que se efectúan sobre dichas cuestiones, se concluye que, frente a la notificación de valores catastrales, el interesado puede hacer valer defectos o vicios afectantes a la Ponencia cuya aplicación determina tal valor catastral, sin perjuicio de que la eventual estimación de los mismos ciña su eficacia a la anulación de los valores catastrales, sin que pueda dar lugar a la anulación directa de la Ponencia de Valores.

#### ***Aporta memoria resoluciones***

Documento	

#### ***Aporta resoluciones gubernativas***

Documento	

#### ***Otros méritos***

Documento	
Descripción	ENUNCIACIÓN MÉRITOS GENERALES Y ACREDITACIÓN DE TODOS
Hash	
Descripción	DOCS ACREDITATIVOS DE MÉRITOS GUBERNATIVOS Y DE GESTIÓN
Hash	

- ☒ SE DECLARA que el solicitante cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria.
- ☒ Declaro no incurrir en ninguna de las incompatibilidades que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para el caso de ser nombrado/a para la plaza que se pretende.
- ☒ Declaro ser ciertos los datos y declaraciones de la presente solicitud.